

¿Qué quiere de verdad el paro?

El único común denominador para entender qué diablos inspira este paro es el desencanto popular, con todo y con todos, pero básicamente con los políticos, el covid, las penurias económicas y hasta la tristeza.

Pero de ahí en adelante todo es confuso. La primera pregunta es si en los paros ha habido infiltración guerrillera. Y la respuesta categórica es sí, sin duda. Me contaba un congresista que se atrevió a meterse hasta las entrañas de las barricadas de Cali que lo que vio en compañía de sus compañeros de aventura lo aterró y no le dejó dudas. Ahí hay una organización jerarquizada, con jefes que dan órdenes, y mucha plata. Son las milicias urbanas del Eln, que tienen secuestrada a Cali. Incluso, hay impresionantes paralelos entre lo que está ocurriendo en el país y el llamado 'diálogo nacional' que viene perdiendo el Eln hace años para pactar un acuerdo de paz con el Gobierno. Y si es cierta la estrategia secreta de los promotores del paro con la que, según la revista *Semana*, alargarán las protestas indefinidamente, se incluirían pliegos regionales que irrigan la negociación del paro por todo el territorio nacional. Ya no sería un monstruo de diez cabezas con el cual negociar, sino de mil.

La segunda pregunta es qué tan metidos está Maduro en esto. Así como me atrevo a asegurar que lo de las milicias del Eln es seguro, lo de Maduro es probable. Ojalá a este gobierno y lo que le saiga mal, puese le sirva.

La tercera pregunta es qué tan metidos están los



Pliego de peticiones imposible
María Isabel Rueda

políticos de izquierda. Aquí se puede constatar que ni bobos que fueran van a dejar pasar semejante oportunidad. Siempre han soñado con desestabilizar a través de la confrontación. Pero les puede estar saliendo el tiro por la culata. Porque me dicen que en Cali hoy no pueden ver a Gustavo Petro ni a nada de lo que huele a izquierda.

¿Qué es lo que realmente busca este paro?
Si uno estudia el pliego de peticiones, encontrará dos tipos de propuestas: las que se pueden conceder y las que no son serias ni viables.
Sobre las primeras, ya el Gobierno concedió una, que incluso figuraba en su fallida reforma tributaria: educación gratuita en nivel superior para estratos uno, dos y tres.

Pero, en su conjunto, las peticiones del comité del paro costarían dos reformas tributarias, o sea el doble de lo que pretendía recaudar la que le tumbó el paro a Carrasquilla.
Veamos los otros puntos. 1) Retirar el proyecto de reforma de la salud sin siquiera haberlo discutido una sola vez en el Congreso, una gran irresponsabilidad. 2) Fortalecer una vacunación masiva que no depende del Gobierno Nacional, sino del abastecimiento de las farmacéuticas extranjeras. 3) Entregar salario mínimo como renta básica mensual, que le costaría al Estado 70 billones, lo que constituye un 7% del PIB. 4) Soberanía y seguridad alimentaria, de la que ahora estamos menos cerca que nunca, cuando termine este paro y acabe la pandemia y veamos qué nos quedó de país. 5) No a la discriminación de géne-

ro y a la diversidad sexual y étnica. Eso ya está en la Constitución. 6) No privatizaciones, cuando precisamente los sabios de la economía dicen que la plata para los programas sociales de la reforma que se cayó se puede sacar, por ejemplo, de vender activos como ISA y Ecopetrol. 7) La cereza del pastel: que se acaben las erradicaciones forzadas. Gran coincidencia que sea una de las peticiones en un paro al que se le nota la plata que lo está sosteniendo y alimentando.

Como son inteligentes, los que están haciendo estas peticiones saben que muchas de ellas son inviables, lo cual nos obliga a pensar que ahí no está su objetivo. La prueba de que la educación gratuita les importa un pito es la furia que les dio a los del paro por que el Presidente la anunció esta semana de manera unilateral. ¿Si eso era lo que buscaban, qué les importa quién lo propone, mientras se vuelva una realidad?

No. El objetivo es otro. Y no queda más remedio que pensar tras de qué van: de la cabeza del presidente Duque. O de debilitarlo tanto que un presidente de izquierda (¿Petro?) pueda instalarse en Palacio cómodamente en el 2022, si es que logran que no se contagie en el país el fastidio que muchos comienzan a sentir por él, al suponer que es quien está respaldando y organizando los paros. Petro está acurrucado detrás, pero no es el dueño de este desorden. De ahí la complejidad de la situación, porque hasta a las centrales obreras se les está desgastando su interlocución.

Entre tanto... ¿Qué tanta razón tiene el país en ser esto molesto con los medios de comunicación por su posición -en los muy bullicios, en otros muy duramente al paro? Será motivo de futuro análisis.

EN CARICATURA

Sin remedio



Tiro directo
Mauricio Vargas

La angustia juvenil

Hay que estudiar / hay que estudiar / el que no estudia es policía nacional', coreaba el miércoles una columna de jóvenes en Barranquilla, en el marco de las protestas -unas pacíficas, otras vandálicas- que tienen semiparalizado al país. Aparte del repudiable contenido de desprecio por los hombres de la Fuerza Pública, el estribillo apunta a la pepa del drama y de las contradicciones que enfrentan millones de jóvenes de las clases media y popular, y que explican buena parte del levantamiento.

Las cifras ayudan a entender. A inicios de los 90, apenas 8 de cada 100 bachilleres accedían a la universidad o a un centro de formación técnica. Para el año 2000, el país había avanzado en ese campo: 22% de los jóvenes de entre 17 y 21 años estudiaban una carrera técnica o profesional. Para 2015, y en buena medida por el crecimiento del Sena, más del 48% de esos jóvenes estaban matriculados en un centro de estudios superiores -de mayor o menor calidad-; docertercios, en una carrera profesional, y un tercio, en una técnica. Fue un salto enorme: en 25 años, el país pasó de llevar una infima parte de sus bachilleres a cursar una carrera a llevar a cerca de la mitad. Hasta una cuarta parte se ve obligada a desertar y no termina sus estudios. Aun así, se trata de una mejora significativa. Para lograrlo, millones de hogares pobres hacen esfuerzos descomunales, con la esperanza de ver a sus hijos formados en una carrera que les permita dar a sus vidas un salto de calidad. No solo implica gastos en matrículas (45% está en universidades privadas), libros, transporte y demás, sino que el joven no aporte ingresos que le caerían muy bien al hogar.

El sueño tuvo un duro despertar. Mientras el país avanzaba en la formación superior de su juventud, el aparato productivo fue incapaz de absorber a ese ejército de profesionales y técnicos que salían a buscar trabajo, muchas veces con una carrera que no tenía demanda. El desempleo juvenil comenzó a subir desde mediados de la década pasada: en 2016 pasaba del 18%, superó el 20% antes de la pandemia, y tras la primera cuarentena general al año pasado rozó el 30%. Eso sin contar que, entre quienes trabajan, más de la mitad lo hace en la informalidad. Con las diferencias del caso, esto mismo ha ocurrido en Europa -que por décadas ha sufrido altas tasas de desempleo juvenil- y, en nuestra región, en países como Chile.

Por este camino, millones de jóvenes colombianos han pasado de la ilusión a la desesperanza y la angustia. Y como reciben grandes cantidades de información vía las redes sociales (donde conviven, sin distinción, las noticias serias y veraces con la manipulación y las mentiras), el resultado es lo que estamos viviendo: de la explícita desilusión, la juventud pasó a la indignación, justificada por fenómenos como la corrupción, pero incendiada por las fake news.

A diferencia de lo que ocurría en el pasado, las marchas no son protagonizadas por sindicalistas, sino sobre todo por estudiantes que no saben qué será de sus vidas cuando se gradúen, y por jóvenes que se graduaron o desartaron de sus estudios superiores y están desempleados. "Hay que estudiar, hay que estudiar", corean, pero lo que temen es no conseguir trabajo. Como reveló el viernes una encuesta de C&C, la Universidad del Rosario, EL TIEMPO y Caracol Radio, más que oportunidades de estudio, un alto porcentaje de los jóvenes piden un empleo.

Mientras la economía no vuelva a crecer a buen ritmo -algo muy difícil por ahora-, y mientras ese crecimiento no se comparta con criterios específicos para estimular el empleo entre los jóvenes, así como recursos para el emprendimiento de pequeños negocios -las protestas que estamos viviendo seguirán siendo pan de cada día. En este gobierno y en el que venga.

mvargasino@hotmail.com

La crisis del paro

La crisis generada por el paro nacional no tiene precedentes. Es esencial encontrar soluciones a través de una franca concertación entre el Gobierno y el Comité Nacional del Paro, y atender cómo evitar una crisis similar hacia el futuro.

La situación se hizo más compleja por el atraso del Gobierno en entender la dimensión y profundidad de la protesta y sentirse a negociar, así como por la percepción de que no había cumplido con compromisos que adquirió hace dos años. A ello se agrega la falta de una agenda de los promotores del paro al inicio de las protestas, más allá de su oposición a la reforma tributaria.

Además, no es muy claro que todos los sectores que participan en el paro, y sobre todo los que han bloqueado vías, estén realmente coordinados por el comité nacional. A esta fragmentación de los participantes en el paro se une la falta de articulación con los movimientos políticos. La única propuesta política importante es la que presentó la Coalición de la Esperanza antes de reunirse con el Presidente de la República.

A todo ello hay que agregar el vandalismo desde los primeros días, que parece estar coordinado, pero la inteligencia militar no ha sido capaz de identificar a sus organizadores y frenarlo. El enfrentamiento entre civiles con armas en Cali hace una semana fue, además, un hecho aterrador. Y ahí, obviamente, la violencia contra los manifestantes por parte de algunos agentes de la Policía y el Esmad,



Lecciones y desafíos
José Antonio Ocampo

así como la violencia contra la Policía, que ha dejado muertos, casi todos civiles, y muchos heridos en ambos bandos.

La lección principal es que hay un amplio grupo de la población que rechaza los enormes niveles de desigualdad y pobreza que caracterizan a Colombia, que se han agudizado con la pandemia. La amplia participación juvenil nos indica, además, la percepción de muchos jóvenes de que son una generación sin esperanza. La agenda que se acuerde, así como las propuestas frente a las elecciones del año entrante, debe responder a estos inmensos desafíos que enfrenta el país.

La agenda que presentó en forma tardía el comité del paro tiene muchos elementos que se pueden concertar. La duda principal que se ha planteado en los debates públicos es sobre la propuesta de renta básica de por lo menos un salario mínimo. La razón básica es que su costo es muy elevado.

Apoyo una renta básica para hogares pobres que tenga como referencia la línea de pobreza y para hogares vulnerables mientras dura la pan-

demia. Pero además, si se van a destinar recursos públicos sustanciales, prefiero que se lance un programa de emergencia de empleo, sobre todo para mujeres y jóvenes, que sorprendentemente no hace parte de la agenda del comité.

El tema del financiamiento también es crítico. Por este motivo, y porque la demanda de recursos para el gasto social se ha elevado permanentemente, hay que acordar una reforma tributaria. La reforma debe concentrarse en eliminar beneficios tributarios en el impuesto de renta de empresas y personas naturales de altos ingresos, incluyendo la eliminación de los que se introdujeron en la última reforma, así como en un impuesto al patrimonio progresivo para personas naturales y quizás en algunos impuestos de emergencia que gravan estos mismos sectores. El error garrafal del Gobierno fue haber introducido en el proyecto elementos que afectaban a la clase media.

Debo agregar que la reforma tributaria también es importante para generar confianza en los inversionistas privados internacionales, que son críticos para el financiamiento del déficit, tanto por su alta participación en el mercado interno de TES como por su demanda de nuevos bonos que emita el Gobierno en el mercado internacional. Por eso, aunque no comparto los criterios que utilizan las calificadoras de riesgo, perder el "grado de inversión" tendría costos de largo plazo. Después de lo que perdimos en 1999, tardamos doce años en recuperarlo.